

Registro a su cargo (artículo 77 del Reglamento del Registro Mercantil). Al Secretario sólo le compete certificar de los hechos que, en el ejercicio de su función -exclusivamente privada- presencia y le constan, sin que pueda admitirse, bajo ningún concepto, que esa fe privada se extienda (como afirma el recurrente) «A la vigencia de los cargos y su identidad con los que figuran inscritos en el Registro Mercantil. B. Legalidad: Este principio extiende la calificación registral a la "validez del contenido" de los documentos inscribibles, que debe examinarse por lo que resulta de ellos y de los asientos del Registro» (artículo 18 del Código de Comercio, artículo 6.º del Reglamento del Registro Mercantil). Los preceptos reglamentarios citados como fundamento de la nota recurrida (artículos 97 y 112), no son más que aplicaciones concretas de tal Principio al contenido de uno de esos documentos inscribibles: Las certificaciones de los acuerdos adoptados por los órganos sociales; si el artículo 97 exige que en el acta consten los nombres de los Consejeros, será preciso consignar este dato en la certificación extendida con referencia a dicha acta para que el Registrador pueda calificar su validez (del acta; o mejor dicho, de su contenido) «por lo que resulta de ella y de los asientos del Registro». La certificación no es más que el medio o vehículo para llevar a conocimiento del Registrador el contenido del acta; si la calificación se extiende a todo el contenido de ésta no vemos razón para omitir el dato de los nombres de la certificación que sirve para darnos a conocer tal contenido. C. Tracto sucesivo.-Este principio fundamental, contenido en el artículo 11.3 del Reglamento del Registro Mercantil, supone que para inscribir los actos otorgados por un órgano colegiado los miembros de éste han de estar previamente inscritos. La exigencia de consignar en las certificaciones de los acuerdos del órgano los nombres de sus miembros es también una aplicación de dicho principio de orden o vida registral regular, pues sólo así podrá evitarse el caso -nada infrecuente en la práctica- de que pudieran inscribirse acuerdos en cuya adopción hayan intervenido alguno o algunos administradores distintos de los que constan en el Registro, provocando indeseables efectos que darían al traste con la función preventiva y legitimadora del tráfico, evitando contiendas producto de la inseguridad acerca de la concordancia del contenido con la realidad. En la medida en que un sistema registral consiga atajar tales perturbaciones se considera más elevado su nivel de perfección. Creemos que el nuestro alcanza tal nivel de perfección sobradamente y, de producirse alguna perturbación de las citadas, el Registrador incurriría en grave responsabilidad. Como muestra, proponemos un ejemplo que en modo alguno es de laboratorio: En un Consejo de Administración formado por cuatro miembros, dos de ellos cesan antes del plazo legal por fallecimiento u otra causa, los dos restantes nombran otros dos nuevos miembros por cooptación (artículo 138 de la Ley Sociedades Anónimas), pero sin tener en cuenta que los así nombrados han de ser accionistas antes del nombramiento. La elección por tanto será nula, como nulos serán los acuerdos que adopten porque sólo hay dos miembros legítimos de cuatro, y por tanto, carece el órgano del quórum preciso para adoptar acuerdos. Si, además, el acuerdo de designación por cooptación no es elevado a público ni presentado en el Registro a su debido tiempo y, durante ese intervalo, se presentan a inscripción acuerdos adoptados por tal consejo irregularmente compuesto, la aplicación de la tesis del recurrente conduce al resultado de que serían inscritos por conformarse el funcionario calificador con esa fe del Secretario de que «Están presentes todos» y entender -como se pretende- que tal fe se extiende a la vigencia e identidad de los que están en la sesión con los que figuran inscritos en el Registro. Nos encontraremos, en suma, con que ha sido inscrito un acto societario nulo porque la calificación de la verdadera composición del Consejo (y del ejercicio de esa cooptación de que trae causa), se habrán practicado después de la inscripción del acto nulo o impugnabile y, además, la nulidad será patente por el propio contenido del Registro. La salvaguardia de los Principios Registrales compete al Registrador a través de la calificación; a los Tribunales compete -como muy bien dice el recurrente- depurar las responsabilidades en que haya podido recurrir el Secretario por la inexactitud de las afirmaciones que realice al certificar y también -cosa que pasa por alto el recurrente- aquellas en que incurran los funcionarios que, pudiendo detectar tales inexactitudes, por tener los medios y las facultades bastantes, no lo hagan por negligencia inexcusable, como sería (en el caso del ejemplo y en muchos otros), conformarse con la simple afirmación del Secretario de que «están todos» y suponer que «todos» son precisamente los que constan en el Registro y no otros. Los tantas veces citados artículos 97 y 112 del Reglamento del Registro Mercantil, determinan con toda claridad los extremos que debe el Registrador verificar antes de admitir que un determinado acuerdo social, ha sido adoptado por quienes figuran en el Registro, como sus miembros y no por otros distintos.

VI

El Notario interpuso recurso gubernativo a efectos doctrinales ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, manteniéndose en sus alegaciones y añadiendo que no puede prevalecer una interpretación legalista y estrictamente literal de los preceptos que se alejan del espíritu de la norma ante lo que propone el Registrador, y que, complican el tráfico jurídico.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos los artículos 125 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, 11, 97.4, 102 y 112 del Reglamento del Registro Mercantil y la Resolución de este Centro directivo de 12 de junio de 1991.

1. En el presente recurso el Registrador suspende la inscripción de determinado acuerdo del Consejo de Administración de una Sociedad anónima, por no haberse expresado en la certificación protocolizada en la escritura presentada el nombre de los miembros del Consejo que concurrieron a la sesión correspondiente.

2. Es cierto que el artículo 97.4 del Reglamento del Registro Mercantil, al exigir la indicación de los nombres de los miembros del órgano colegiado de administración que asistieron a la reunión, se está refiriendo al contenido del acta respectiva, y que no todo el contenido de ésta debe transcribirse en la certificación cuya protocolización haría posible la inscripción del acuerdo sino únicamente aquellos datos y circunstancias que afecten a su validez y regularidad (artículos 107 y 112 del Reglamento del Registro Mercantil). Ahora bien, no puede desconocerse que esta validez y regularidad presupone que los miembros del órgano colegiado de administración que asistieron a la reunión correspondiente -al menos los que forman el quórum de asistencia mínimo- han de tener sus cargos vigentes y debidamente inscritos en el Registro Mercantil (artículos 125 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y 11 del Reglamento del Registro Mercantil), y estos extremos sólo podían ser calificados por el Registrador si en la certificación protocolizada se expresan, -para su contraste con el contenido de los libros del Registro- debidamente los nombres de los Consejeros concurrentes, lo que, por otra parte, no plantea dificultad alguna, al venir estos recogidos necesariamente en el acta de la que se certifica.

Esta Dirección General, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el acuerdo y la nota del registrador.

Lo que con devolución del expediente original comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 17 de octubre de 1991.-El Director general, Antonio Pau Pedrón.

Sr. Registrador mercantil de Barcelona.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

2939 RESOLUCION de 22 de enero de 1992, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se procede a la convalidación de la autorización número 223 bajo la nueva denominación de «Caja Postal, Sociedad Anónima».

Habiéndose procedido por el Banco de España a la cancelación de la inscripción en el Registro Especial de Cajas Generales de Ahorro Popular de la Entidad Caja Postal de Ahorros y a la inscripción definitiva en el Registro de Bancos y Banqueros de la Entidad «Caja Postal, Sociedad Anónima».

Este Departamento dicta la siguiente resolución:

Se procede a convalidar la autorización número 223 concedida para actuar como Entidad colaboradora con el Tesoro en la gestión recaudatoria a la Caja Postal de Ahorros, que se entenderá expedida respecto a la nueva denominación de «Caja Postal, Sociedad Anónima».

Madrid, 22 de enero de 1992.-El Director del Departamento de Recaudación, Abelardo Delgado Pacheco.

2940 RESOLUCION de 22 de enero de 1992, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se procede a cancelar la autorización número 12 para actuar como Entidad colaboradora con el Tesoro en la gestión recaudatoria y la convalidación de la autorización número 2 bajo la nueva denominación de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima».

Habiéndose procedido por el Banco de España a la cancelación de la inscripción en el Registro Oficial de Bancos y Banqueros de la Entidad Banco Hispano Americano por haber sido absorbida por el Banco

Central, y habiendo cambiado esta Entidad su denominación por la de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima», este Departamento dicta la siguiente resolución:

Se procede a cancelar la autorización número 12 para actuar como Entidad colaboradora con el Tesoro en la gestión recaudatoria correspondiente a la Entidad absorbida. Asimismo se acuerda convalidar la autorización número 2 concedida para actuar como Entidad colaboradora con el Tesoro en la gestión recaudatoria al Banco Central, que se entenderá expedida respecto a la nueva denominación de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima».

Madrid, 22 de enero de 1992.-El Director del Departamento de Recaudación, Abelardo Delgado Pacheco.

2941 *RESOLUCION de 22 de enero de 1992, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se procede a la cancelación de la autorización número 126 para actuar como Entidad colaboradora con el Tesoro en la gestión recaudatoria y la convalidación de la autorización número 48 bajo la nueva denominación de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante.*

Habiéndose procedido por el Banco de España a la cancelación de la inscripción en el Registro Especial de Cajas Generales de Ahorro Popular de la Entidad Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón, por fusión por absorción por la Caja de Ahorros de Valencia, y habiendo cambiado esta Entidad su denominación por la de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, este Departamento dicta la siguiente resolución:

Se procede a cancelar la autorización número 126 para actuar como Entidad colaboradora con el Tesoro en la gestión recaudatoria correspondiente a la Entidad absorbida. Asimismo se acuerda convalidar la autorización número 48 concedida para actuar como Entidad colaboradora con el Tesoro en la gestión recaudatoria a la Caja de Ahorros de Valencia, que se entenderá expedida respecto a la nueva denominación de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante.

Madrid, 22 de enero de 1992.-El Director del Departamento de Recaudación, Abelardo Delgado Pacheco.

2942 *RESOLUCION de 31 de enero de 1992, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento número 1/66/1990, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.*

Habiéndose interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo recurso contencioso-administrativo por don José Toril Rodríguez en impugnación del Real Decreto 359/1989, de 7 de abril, de retribuciones de las Fuerzas Armadas, por el presente, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal, se emplaza a los posibles interesados en el mantenimiento del acuerdo de la resolución recurrida que sean titulares de un derecho subjetivo o un interés legítimo, ante la referida Sala por plazo de veinte días.

Madrid, 31 de enero de 1992.-El Subsecretario, Enrique Martínez Robles.

2943 *RESOLUCION de 4 de febrero de 1992, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se autoriza la emisión de obligaciones simples por parte de la República de Irlanda.*

En virtud de lo dispuesto en las Ordenes de 3 de febrero de 1987 y de 14 de noviembre de 1989, sobre emisión, negociación y cotización en España de valores denominados en pesetas, emitidos por no residentes, y vista la documentación presentada por la República de Irlanda, he resuelto:

Primero.-Autorizar a la República de Irlanda la realización de una emisión de obligaciones simples por importe de 10.000 millones de pesetas.

Segundo.-Características de las obligaciones:

2.1 Las obligaciones, numeradas del 1 al 100.000, ambos inclusive, serán al portador; el valor nominal de cada una de las obligaciones será de 100.000 pesetas.

2.2 El precio de emisión será del 101,25 por 100 del valor nominal de las obligaciones.

2.3 El tipo de interés nominal será fijo, del 10,55 por 100 anual, pagadero por anualidades vencidas.

2.4 La amortización de los títulos se producirá a los diez años de la fecha de emisión. El precio de reembolso será el 100 por 100 del valor nominal de las obligaciones.

Tercero.-Se autoriza la libre cotización, negociación y circulación en España de los valores a los que se refiere la presente Resolución.

Cuarto.-Estas obligaciones tendrán la consideración de efectos públicos en cuanto a su admisión a cotización oficial en Bolsa.

Asimismo, dichos valores podrán ser incluidos en el sistema de liquidación y compensación de operaciones en Bolsa y depósito de valores mobiliarios, previsto en el Decreto 1128/1974, de 25 de abril.

Quinto.-La adquisición por inversores españoles de estos valores tendrá la consideración de inversión exterior, siéndole de aplicación el Real Decreto 2374/1986, de 7 de noviembre.

En todo lo no previsto en la presente Resolución será de aplicación lo establecido en las Ordenes de 3 de febrero de 1987 y de 14 de noviembre de 1989 del Ministerio de Economía y Hacienda y demás legislación aplicable.

Madrid, 4 de febrero de 1992.-El Director general del Tesoro y Política Financiera, Manuel Conthe Gutiérrez.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

2944 *RESOLUCION de 15 de octubre de 1991, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de aceptación al radioteléfono portátil marino VHF, marca «Telemobile», modelo HX-220-S.*

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto («Boletín Oficial del Estado» número 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de «SCS Componentes Electrónicos, Sociedad Anónima», con domicilio social en Barcelona, Consejo de Ciento, 409, código postal 08009.

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación al radioteléfono portátil marino VHF, marca «Telemobile», modelo HX-220-S, con la inscripción E 96 91 0447, que se inserta como anexo a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda condicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Importadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración de Telecomunicaciones.

Madrid, 15 de octubre de 1991.-El Director general, Javier Nadal Ariño.

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto («Boletín Oficial del Estado» número 212, de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomunicaciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Radioteléfono portátil marino VHF.
Fabricado por: «Marantz Japan Inc.», en Japón.
Marca: «Telemobile».
Modelo: HX-220-S.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Artículo 8.2 del Real Decreto 1006/1989.

Con la inscripción

E 96 91 0447

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1996. Condicionado a la aprobación de las especificaciones técnicas.